

APROXIMACIONES Y TERRITORIALIDADES CONTRA-HEGEMÓNICAS SUBALTERNAS. EL CASO DE TUMACO

AUTORES

Silva, Miguel Ángel; Car, Nora Marcela.

Departamento de Geografía, Centro de Investigaciones Geográficas (CIG) / Instituto de Investigaciones y Ciencias de la Educación (FaHCE). Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS - CONICET). Facultad de Humanidades.

miguelangel.silva153@gmail.com / marce.car2012@gmail.com

palabras clave

subalternidad; territorialidad; colonialidad; Caribe colombiano.

RESUMEN

El presente trabajo tiene el objetivo de brindar los elementos constitutivos del concepto de subalternidad a nivel teórico, como así los conflictos y debates en las formas de habitar los territorios. Es un trabajo inicial y exploratorio acerca de estos conceptos. En cuanto a lo metodológico, se utilizó la investigación interpretativa hermenéutica crítica. En primer lugar, nos planteamos las siguientes hipótesis: ¿cuáles son los lugares de enunciación del concepto y su genealogía? El intelectual activista (pero desde la cárcel) Antonio Gramsci acuñó este término en referencia a la relación entre hegemonía (gobierno por consenso) y dominancia (gobierno por la fuerza). Un grupo subalterno es aquel que todavía no toma conciencia de su fuerza y posibilidades de desarrollo político y, entonces, no escapa a la fase primitivista donde esta actúa como nexo entre la ideología librecambista y el sindicalismo teórico, en este caso el italiano.

Habría que esperar a intelectuales hindúes para que este concepto tomara fuerza en la década de los 90, especialmente a través de Ranajit Guha y Gayatri Spivak. El punto de partida es el diccionario de Oxford; el subalterno representa “el rango inferior”. Guha aquí hace un cambio radical, pues para él “el subalternismo” es el atributo general de subordinación en las socieda-

des del Sudeste Asiático, ya sea que esta se exprese en términos de clase, casta o edad o género desde esta óptica hindú.

En segundo lugar: ¿qué sucede en el ámbito latinoamericano? Existen varios autores y autoras.

En este sentido, para Walter Mignolo el subalternismo significa la posibilidad de establecer un vínculo teórico con las diferentes regiones periféricas afectadas por la colonialidad del poder, cruzar fronteras y poner a conversar a los afines, quienes añaden matices a la discusión central (Szumurk & Mckee, 2009). Alberto Moreiras nos plantea el debate en relación con la discusión entre lo local y lo global, lo particular y lo universal. En consonancia con Zizek: “cada polo del antagonismo es inherente a su opuesto”. El desafío es relacionar los campos hermenéuticos con los políticos, y no solo se limita a una dialéctica entre lo local y lo global.

Javier Sanjiné piensa la representación étnica en Bolivia y las maneras de pensar lo nacional étnico en relación con la articulación que las clases letradas e intelectuales hacen de lo europeo y lo autóctono indio, mestizo, criollo, cholo. Despensar, desleer, negociar son métodos que seguir.

Desde Puerto Rico, María Milagros López articula las relaciones intelectuales/subalternos, ciudadanía/gobernabilidad. En ese país, la mitad de la población está estructuralmente desempleada. López propone la insurgencia desde la persuasión y de ahí la invención del placer como forma de justicia. Lo hegemónico es una manera que tienen las elites de mirar hacia abajo, una forma de subalternización, dado que la alienación, la revolución y la negación son formas elitistas, precisamente de subalternización.

En tercer lugar, se plantean las siguientes preguntas: ¿el subalternismo está atrapado en esa dialéctica de las élites y pregunta desde arriba, desde la modernidad, el desarrollo, el capitalismo, el socialismo, las hegemonías, el estado, la sociedad civil o la colonialidad del poder cómo ver, oír y hasta sentir a los subalternos?

La ponencia concluye con un problema específico en Tumaco (Colombia), donde se podría responder a los interrogantes planteados en una situación de conflictividad social y territorial

INTRODUCCIÓN

Desde nuestro equipo de investigación y a modo de presentación de algunos resultados, se presentó en otro evento de investigación una ponencia sobre Tumaco (Nariño), donde se mani-

fiesta el problema de la población afrodescendiente y cómo ellos y ellas fueron despojados/as de sus tierras por problemáticas emergentes del capitalismo residual y el emergente y los conflictos que ellos acarreaban (narcotráfico, complicidad estatal, agronegocios, racismo ancestral). Para este evento hemos re-actualizado esta problemática de Tumaco (Colombia), porque se combinan elementos que podríamos encuadrar en la dialéctica subalternidad-hegemonía social-estatal y económica (recursos naturales).

Cabe acotar que se realizó un cruce epistemológico entre la sub-alternidad y los estudios decoloniales, ya que tienen puntos en común y es necesario explicitarlos. Precisamente, los autores que trabajamos para el problema específico, Restrepo y Hoffman, conectan en buena parte de sus discursos estas dos dimensiones teóricas: subalternidad y estudios decoloniales.

La presencia de la transdisciplina y los entrecruzamientos con algunas ciencias sociales, especialmente la Antropología, Sociología, Ciencia Política y Economía, son indispensables para el tratamiento de cuestiones territoriales “otras”, y para ello es necesario un proceso de deconstrucción de los discursos geográficos que han permeado la academia con tradiciones culturales estereotipadas y dominantes.

En trabajos anteriores, fijamos el territorio del Pacífico-colombiano en forma general. En este caso presentaremos la problemática teórica-empírica en una ciudad específica: Tumaco, donde investigaremos desde los estudios culturales por qué y cómo esta ciudad adquirió un dinamismo, que, aunque propio de todo el territorio del Pacífico, emerge concentrado en las matrices culturales con pautas de apropiación y dominio.

Es necesario un descentramiento epistémico (óptica decolonial) que convalide y ratifique los estudios culturales, especialmente el racismo y su impacto en el territorio con todas las tensiones y conflictos emergentes. Asimismo, se trabaja la incidencia de los movimientos sociales autogestionados por la propia población afro, como forma de mitigar los excesos de apropiación de la cultura y de la economía por la tarea colonizadora primigenia y las nuevas formas de explotación del capitalismo de este territorio periférico

ENCUADRE TEÓRICO-METODOLÓGICO

En ese sentido, la presente ponencia tiene como objetivo fijar algunas de las principales bases conceptuales y giros epistemológicos que se han desarrollado en América Latina a través de un estudio crítico de los estudios culturales. Para realizar nuestra tarea hemos desplegado un interés hacia las cuestiones antropológicas que se cruzan con las cuestiones geográficas, políticas, económicas y culturalmente situadas.

Metodológicamente coincidimos con Borsani y Quintero (2014), quienes en la introducción al libro *Los desafíos decoloniales en nuestros días. Pensar en colectivo*, nos plantean lo siguiente:

Existieron distintos discursos dispersos que nos acercan a nuestra problemática, pero últimamente el grupo modernidad/colonialidad se presenta como un grupo de intelectuales-con sus diferencias-que nos parece el más cohesionador.

En esa dirección, el programa modernidad/colonialidad, en tanto opción epistémico-política, desmonta y visibiliza la lógica que estructura la matriz colonial de poder, abriéndose a otras trayectorias, a otros derroteros teóricos y prácticos, las genealogías negadas, invitándonos a optar por otros domicilios epistémicos y políticos donde alojarnos, invita a abreviar en otros reservorios, y a construir un pensamiento de frontera, en donde pensar esté amarrado al actuar, ofreciendo y posibilitando entonces una hermenéutica ampliada más allá de la geografía euro-céntrica colonial. Hablamos de una hermenéutica ampliada. Porque hace falta una acción de reinención del mundo y de los mundos por fuera de la opresiva coraza colonial y para ello es también menester echar mano a otros recursos interpretativos por fuera del escenario intra-moderno, ya saturado.

Borsani y Quintero, 2014, p. 16)

La metodología de la ponencia es hermenéutica-crítica. Es decir, un proceso original de comprensión e interpretación de la problemática: una versión crítica de la situación de los grupos más vulnerables de Tumaco, en este caso afro-colombianos. En cuanto a nuestros materiales, se utilizó bibliografía oficial estadística, ensayos académicos críticos, interpretaciones directas e indirectas, boletines e informaciones periodísticas especializadas en problemas socio-ambientales.

El centro de nuestras tareas fue y es la sociedad afro-colombiana y sus niveles de desposesión del manejo de sus recursos naturales, las normativas gubernamentales y los poderes económicos externos sobre dicha sociedad. En este caso se trata de provocar una deconstrucción dualista y esencialista. Propone hacer emerger a través de las lecturas las conflictividades que han sido silenciadas y ocultadas, para incorporar actores sociales en conflicto y poner de manifiesto este.

Apartándose de la clásica metodología positivista-causalista, se acerca a una metodología que se basa sobre un entramado de actores sociales en permanente conflictividad y se propone responder cómo la hermenéutica-crítica —más allá de lecturas e interpretaciones lineales complacientes— tiende a poner en relieve dichas conflictividades, buscando a través de autores y sus interpretaciones y re-interpretaciones la naturaleza de esas conflictividades socio-ambientales.

La presente ponencia tiene conclusiones parciales que implican un giro decolonial y, a su vez, lo complementamos con una posible articulación con los estudios culturales a partir de la etnicidad y de la otredad territorial y social-ambiental, teniendo en cuenta que esas relaciones no se encuentran exentas de fuertes grados de tensiones generales y/o particulares.

ESTADO DE SITUACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

En esta ocasión ofrecemos un avance entrelazando los tres ejes estructurantes que habíamos planteado en sus inicios: Epistemologías del Sur, Enfoques decoloniales y Movimientos Culturales Afro-descendientes (incluye en esta etapa los marcos normativos entre 1993 y 2004). Nos pareció oportuno investigar sobre Movimientos Culturales afro-descendientes, y posamos nuestras miradas en una región específica: el Pacífico colombiano. Comprende parcial o totalmente cuatro departamentos: Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Dejamos para un análisis pormenorizado para otra etapa de la investigación sobre Tumaco, en el departamento de Nariño.

El territorio del Pacífico colombiano se extiende desde el límite con el Darién panameño hasta la frontera con Ecuador. Se trata de un territorio rico en biodiversidad, minería. Los españoles en su etapa de colonización encontraron a los chocoes como pueblo originario y que constituían familias lingüísticas sobre

las que los especialistas no han llegado a un acuerdo, pero todos ellos fueron categorizados bajo esta clasificación de chocoes. La conquista española utilizó la mano de obra indígena para la principal explotación del oro.

El proceso de distribución de la población negra fue el principal factor que le iría a otorgar una etnicidad particular. Los esclavos desembarcaban en Cartagena de Indias, de allí a Popayán y de ahí se vendían en las principales ciudades, tales como Buenaventura, Tumaco o Quibdó. Durante el los siglos XVIII y XIX hubo revueltas de cimarrones que no prosperaron, pero que fijaron los inicios de las luchas reivindicatorias que, desde otro punto de vista, algunos intelectuales negros ejecutaron a través de su accionar pedagógico y/o literario-político, como Manuel Saturnino Valencia, Diego Luis Córdoba y Amir Smith Córdoba (estos dos últimos en el siglo XX, ya inscriptos en la categoría de lucha por los derechos humanos).

Si tenemos en cuenta la superficie territorial de los cuatro departamentos, constituyen un territorio relativamente poblado con más de 8.000.000 de habitantes. Las condiciones de explotación forestal y agricultura e industrialización de plátanos y marginalidad de las áreas rurales han supuesto un proceso migratorio hacia las principales ciudades, tales como el puerto Buenaventura (principal puerto pesquero) o la ciudad de Cali.

Durante estos largos 500 años, la situación y problemática de la población afro-colombiana se caracterizó por la explotación de su fuerza de trabajo en los empleos duros, el despojo de sus tierras, el retraso educativo, la pobreza e inhumanidad en las condiciones de vidas familiares, el racismo en las relaciones con las comunidades mestizas blancas, la discriminación racial en la cotidianidad, la exclusión racial en casi todas partes y la ciudadanía incompleta, ciudadanía “recortada” por la violación de sus derechos humanos. Las graves consecuencias económicas, sociales, culturales, educativas, políticas y espirituales que provocó la institución de la esclavitud están vivas y activas dentro de la sociedad colombiana, unidas a los desequilibrios, inseguridades e injusticias propios del modelo de desarrollo económico y social capitalista promovido por las élites dominantes. Sus víctimas siguen siendo las poblaciones afrodescendientes que reivindican la verdad, justicia, reparación y equidad social y comunitaria (Silva *et al.*, 2017).

Realizamos un resumen de la rica historia de la ciudad em-



Figura 1. División política de Colombia

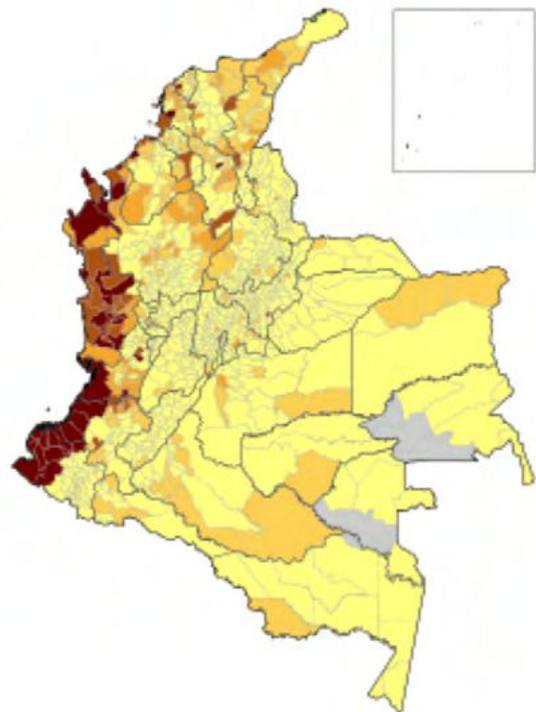


Figura 2. Mapa que representa la densidad de población afro-colombiana
Fuente: Sánchez, Camilo (2008)

blemática de Tumaco y recurrimos al texto orientador de situaciones *Tumaco, haciendo ciudad* (Restrepo, Agier y Hoffman, 1999). Aquí la fecha de edición de este libro reviste especial importancia, ya que posteriormente presentamos otra bibliografía —ya de los años 2014— acerca de la Colombia posconflicto como abordaje de la evolución de los procesos de des-territorialización y desplazamiento de hombres, mujeres y niños/as, con toda la problemática que esta situación conllevó y aún persiste. Indiscutiblemente que la política gubernamental con sus aciertos y con sus errores discrecionales juegan un papel de primer orden en el entramado geográfico del Pacífico Colombiano. En última instancia, desde este punto de análisis lo que se presenta son marcos acotados de la o las problemáticas elegidas.

Del mencionado texto de *Tumaco, haciendo ciudad* (1999) reseñamos los capítulos que se detallan a continuación: 1) El de Restrepo plantea un análisis puntual de la cultura urbana y territorial-local y 2) El de Hoffmann, que nos acerca una síntesis más general de los aspectos sociales, político-institucionales y económicos.

En el capítulo: *Aletosos, Identidades generacionales en Tumaco*, Eduardo Restrepo (1999) nos introduce a un análisis cultural y geográfico, diríamos que a micro-escala espacial, que es necesario sintetizar. Restrepo rescata la idea de otredad subjetiva a través de los “aletosos”. Pero ¿qué significa aletoso? Tumaco es una ciudad-puerto con mayoría de población negra que vivió períodos hasta la década de los 50 como una comunidad en la que se han superpuesto extractivismos de madera, caucho y tagua, con nuevas formas agrarias de explotación. Esto conlleva también un proceso en el que las identidades y experiencias culturales negras, dado que los antiguos anclajes y soportes culturales e identitarios rurales tropicales, se encuentran re-adaptados con las nuevas dinámicas urbanas. Existen muchas interpretaciones del término aletoso, pero una de la más convincente es aquella que identifica al joven negro que con una mano sostiene la navaja y la otra es desplazada a manera de la aleta de un pez. Según la comunidad de Tumaco, se ha bautizado con el nombre de “aletosos” a aquellas personas que en su vestir son exageradas, emplean prendas muy vistosas e incluso llegan a usar aretes, manillas de cuero, entre otras.

Al principio ciertos jóvenes de algunos barrios periféricos fueron clasificados como *aletosos* por grupos sociales ajenos a estos barrios y/o por las generaciones mayores. En ningún momento

el término *aletoso* surge de quienes son así clasificados, ni fue inicialmente una categoría de autoafirmación: el *aletoso* no se llamó inicialmente a sí mismo de esta manera; fueron los demás quienes a sus espaldas, sin que se diera cuenta, lo señalaron como tal. Así, para principios de los 90, se podía distinguir al *aletoso* con observar su manejo del cuerpo, el estilo de su caminar, el corte de cabello, los aretes que lucía..., es decir, una serie de significantes que socialmente estaban codificados para identificarlo.

No obstante, el término fue adquiriendo cada vez más una connotación despectiva y asociada a determinadas prácticas delincuenciales. En esta acepción, *aletoso* es una palabra estipulada por sectores sociales y generacionales que se han visto efectiva o imaginariamente amenazados por las prácticas de ciertos jóvenes de algunos barrios considerados “marginales”. Con un sentido despectivo, *aletoso* se ha utilizado para señalar a un individuo a quien se le atribuyen determinadas características. Aparece ya no solamente asociado con un manejo del cuerpo y del lenguaje, sino que también se asocia con la vagancia, el consumo de drogas y la delincuencia. El *aletoso* es un objeto de prevención y agresión por parte de quienes efectiva o imaginariamente lo consideran una amenaza a sus intereses. En su punto más extremo, mientras no se demuestre lo contrario, para los miembros de los diferentes aparatos policiales el *aletoso* es un delincuente efectivo o potencial. Por su parte, los *aletosos* perciben a aquellos como virtuales enemigos.

Las construcciones locales de las identidades de los *aletosos* han sido marcadas por discursos hegemónicos que no solo los estigmatizaron en el orden de lo censurable, sino que han constituido estrategias de apropiación/re-significación/transformación de estas representaciones. Ser *aletosos* constituye también una experiencia de auto-afirmación, con una configuración de identidades que logran subvertir en ciertos aspectos esta encrucijada de estigmatizaciones de los discursos hegemónicos. La circulación de estas autoafirmaciones de la identidad del *aletoso* recoge, utiliza y tuerce para sí las imágenes moldeadas socialmente desde las relaciones de poder generacionales, socioeconómicas y culturales. Se instauran, esta vez desde quienes han sido definidos como *aletosos*, unas identidades que empiezan a reivindicarse en sus propios términos.

“Las imágenes ‘en negativo’ y peyorativas se fragmentan en varios puntos, pero aún no se ha logrado romper y cuestionar el

entramado de poder que los estigmatiza” (Restrepo, 1999, p. 186). El autor describe y analiza en el capítulo otras consideraciones estrictamente antropológicas, como la música, el baile, las relaciones generacionales y con otras comunidades. En definitiva, se propone poner en tela de juicio la estigmatización hacia el Otro, que si bien es visibilizado, no deja de ser estigmatizado por los ciudadanos “normales” que paradójicamente son negros.

2) Hoffmann (1999), luego de historizar lo acontecido en Tumaco entre los siglos XVIII y XIX hasta la década 1920-1930, se plantea la siguiente pregunta: ¿se ha visto la emergencia de una región en la zona sur del Pacífico? A principios del siglo XX, a nivel de la creación de paisajes y ámbitos de vida, comienza a implementarse un modelo de ordenamiento territorial coherente con las demandas del núcleo andino dominante desde lo social, cultural, política y económicamente. En este caso, la presencia de redes de transporte, que son vitales para los procesos de ordenamiento territorial; pero solo se organizó entre una ciudad-puerto: Tumaco, que se encuentra unida con la carretera hacia Pasto. Los centros urbanos menores han sido abandonados por el poder central, sea por un interés geopolítico o por funciones valoradas por el mercado.

Es necesario rescatar que hubo dos normativas importantes: la de 1983 y la de 1992, que es necesario aclarar para conectar los planes del gobierno y las demandas y expectativas de la población local (negra). Hace ahora un decenio que el Pacífico ha dejado de ser ignorado por el Estado, que introdujo planes de desarrollo con presupuestos significativos: en 1983 el Plan de Desarrollo Integral para la Costa Pacífico, Pladeicop, y en 1992 el Plan Pacífico DNP, si bien estos retoman de alguna forma el modelo anterior, al privilegiar infraestructuras y editar reglamentaciones sin establecer siempre consultas previas con la población local. El Proyecto Biopacífico, financiado con fondos internacionales del Plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, intentó escapar de este patrón y enfocó sus acciones hacia micro-proyectos que involucraban a las poblaciones, en aras de conservar la biodiversidad, a la vez que fomentaba modos alternativos de explotación de los recursos, pero desapareció de hecho cuando se acabó el financiamiento internacional.

Parece que las metas nunca fueron alcanzadas cabalmente. Un diagnóstico elaborado años después permite evaluar los resultados de tal política: en el Pacífico, “cada sistema hidrográfico

forma una cuenca económicamente independiente, casi aislada” (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 1983, p. 78). Las vías de comunicación terrestre están desarticuladas entre sí, y solamente en Urabay Tumaco “comienza a darse un impulso a la consolidación de espacios agrarios”. Aunque Tumaco tiene un radio de acción territorial mayor en relación con el de Buenaventura, que funciona como puerto-enclave, la costa en general no responde a una región funcional, sino que más bien se trata de un espacio desorganizado y periférico, cuyo puesto dentro de la economía nacional es el de producir algunas materias primas, sobre todo para la región andina (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 1983, p. 78).

Termina este documento señalando la falta de desarrollo regional de madera y metales preciosos propios y la enorme dependencia de la costa frente a los centros andinos, como Medellín y Cali. Quizás este juicio se pueda matizar quince años más tarde, al constatar la existencia de un área de influencia muy marcada alrededor de Tumaco, estructurada en torno a migraciones, relaciones familiares, trabajo asalariado y comercio.

Todo indica que la “opción” escogida a principios de siglo no dio paso a una construcción regional fuerte, sobre todo por la visión parcial que tuvieron los políticos encargados de las políticas de fomento regional. Desde otro punto de vista, y a propósito de Nariño contemporáneo, otros autores precisan el problema:

Teniendo un puerto sobre el Pacífico: Tumaco; Nariño no ha tenido un proyecto estratégico de vinculación al mercado internacional y aunque se construyó el ferrocarril y la carretera a Tumaco-Pasto, no se ha producido la integración económica de la cordillera andina con la llanura costera, por dos factores:

- el centro de poder es blanco y mestizo y se localiza en el interior del territorio, en la zona andina,
- desde el centro de poder, los indios y negros de la costa no son reconocidos como sociedades que disponen de un territorio, sino como fuerza de trabajo disponible para explotar, al igual que la diversidad de los recursos naturales del territorio, los cuales son vistos como unidades individuales y no como un sistema

(Rojas y Sevilla, 1994, p. 79).

Ahí reside un importante nudo de la cuestión. Se quiso instrumentar la región sin la participación de la mayoría de los habitantes, al considerar el Pacífico como un espacio “vacío” de actores y poderes, un espacio-soporte inerte y un espacio-medio de producción o más bien de extracción todavía no apropiado y “libre” para las inversiones.

Basta ver las políticas agrarias implantadas por el INCORA (Instituto Colombiano de la Reforma Agraria) en esta región para darse cuenta de la enorme distancia que existe entre las concepciones del Estado y de sus agentes y las de las poblaciones residentes. Hasta 1991, el papel del INCORA se redujo prácticamente a regular los títulos de las grandes plantaciones adquiridas más o menos legalmente por los inversionistas blancos, mientras que en los poblados negros se aceptaba regular algunas parcelas efectivamente sembradas y cultivadas, sin reconocer el derecho de propiedad sobre los predios todavía no explotados, pero tradicionalmente apropiados por un grupo familiar o un individuo.

Pero una región no es solamente la organización de algunas infraestructuras en un espacio dado; una región es ante todo un sistema de relaciones, un sistema social y político lo suficientemente complejo para “producir sentido” para sus moradores y distinguirse de la región vecina. En el Pacífico, los pobladores negros no existieron como interlocutores, ni se les reconoció como tales. Entrevistas realizadas en noviembre de 1996 nos llevan a la conclusión acerca de los despojos de tierra en el área de la carretera Tumaco-Pasto por las empresas palmicultoras. No fue una situación capaz de protagonizar el desarrollo regional, y menos aún de desarrollar objetivos y medios propios para lograrlo. Hoy las cosas están cambiando, y los actores regionales se movilizan para reivindicar derechos propios, en particular derechos territoriales que vuelven a dar un lugar preeminente a los sectores rurales de la región.

Estudios más recientes del Departamento Nacional de Planeación DPN, citados por el movimiento social Cimarrón en su Informe 2004 sobre el estado de los Derechos Humanos de las Comunidades Afrocolombianas, concluyen que el 90 % de la población afro-colombiana vive en condiciones alarmantes de miseria, exclusión social, discriminación racial y segregación social. Este movimiento social Cimarrón afirma que el panorama socioeconómico refleja que en Colombia la mayoría de los descendientes de los africanos son pobres, y que la mayoría de

los pobres son descendientes de africanos, sin que ello haya sido motivo de preocupación para los gobiernos.

Algunas estadísticas del DNP sobre la realidad afro-colombiana son las siguientes:

Entre los cuatro departamentos suman alrededor de 8.340.000 habitantes.

Departamento de Nariño: 1.766.000

Ciudad de Tumaco: 187.000 (55 % urbana-45 % rural)

- Las zonas de mayor predominio de población afro-colombiana son aquellas que presentan los más bajos índices de calidad de vida del país.

- El ingreso per cápita promedio de los (as) afro-colombianos(a) se aproxima a los 500 dólares anuales, frente a un promedio nacional superior a los 1500 dólares.

- El 75 % de la población afro del país recibe salarios inferiores al mínimo legal y su esperanza de vida se ubica en un 20 % por debajo del promedio nacional.

- La calidad de la educación secundaria que recibe la juventud afro-colombiana es inferior en un 40 %, al compararla con el promedio nacional.

- En los departamentos del Pacífico colombiano, de cada 100 jóvenes afro que terminan la secundaria, solo dos ingresan a la educación superior.

- Aproximadamente el 85 % de la población afro-colombiana vive en condiciones de pobreza y marginalidad, sin acceso a todos los servicios públicos básicos.

La superación de esta compleja problemática de la población afro-colombiana requiere la intervención especial y prolongada del gobierno nacional, en estrecha coordinación con los gobiernos departamentales y nacionales, asignando recursos suficientes y condiciones institucionales apropiadas para la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo de la Población Afro-colombiana, que en cumplimiento de la Ley 70/93 cada gobierno debe implementar dentro del Plan de Desarrollo y el Plan de Inversión Nacionales. En el Departamento Nacional de Planeación DNP debe crearse una unidad especial de planeación y seguimiento a la implementación y ejecución del plan afro-colombiano.

El gobierno nacional debe elevar a política pública la lucha

contra la exclusión racial de las personas negras en el mercado laboral público y privado. Es urgente la concertación e implementación de un Programa Nacional para la igualdad racial en las Oportunidades de Empleo, que establezca medidas de acción afirmativa o diferenciación positiva, a favor de las personas negras competentes y estímulos fiscales y en la contratación estatal a favor de los empleadores cooperantes.

Pero también las personas afro deben asumir sus propias responsabilidades étnicas y sociales. En los municipios los partidos políticos, las organizaciones sociales y las alcaldías deben concertar y determinar los proyectos de vida que desean para el presente y futuro de la niñez y la juventud afro-colombiana; estos proyectos deben contener y desarrollar los valores de la identidad afro-colombiana, y reflejarlos en los planes de desarrollo. Nadie podrá ejecutar acciones de progreso étnico-social de las comunidades afro si ellas mismas, a través de sus líderes y organizaciones sociales, educativas y políticas, no lo quieren hacer para sí.

En octubre de 2004 cientos de académicos que trabajaban en la región del Pacífico en los países andinos, Colombia en particular, enviaron una carta al presidente Álvaro Uribe en rechazo del Proyecto de ley 16,2003, redactado por el Senado Nacional de Colombia. Con ese proyecto de ley se aprobaban nuevas Normas Orgánicas de Ordenamiento Territorial y se revocaban los derechos culturales y territoriales de los afrocolombianos que habían sido reconocidos anteriormente en Proyecto de Ley 70,1993.

ACTUALIDAD DEL PACÍFICO COLOMBIANO Y LA ERA POST-CONFLICTO

En los párrafos anteriores nos abocamos a un análisis que ciertamente podríamos catalogar de explicativo, con referencias a conflictos inter-étnicos, una síntesis apretada de la configuración de la región y especialmente para la ciudad de Tumaco y un compendio estadístico de la región del Pacífico Colombiano, relacionándolo con el problema del narcotráfico, entre otras causas.

Avanzando en la investigación llegamos y nos dirigimos a la era post-conflicto, que podría ser categorizado como el nuevo eje de los serios y graves problemas que se desarrollan en la región. Este fenómeno surge aproximadamente veinte años atrás (para nuestra región) y tiene una matriz donde se entremezcla la eco-

nomía, la guerra, los desplazamientos que implican procesos de des-territorializaciones y nuevas re-territorializaciones y la política nacional e internacional por los problemas del narcotráfico y los grupos paramilitares. Consultamos fuentes periodísticas y artículos académicos para aclarar este panorama tan complejo. Nos pareció oportuno abordar el artículo de (Murillo López & Soto López, 2014).

Como hemos visto, el área del Pacífico colombiano presenta una gran biodiversidad, riqueza hídrica, riqueza étnica, riqueza minera e ictícola, dos puertos importantes: Buenaventura y Tumaco, pero aun así es una de las regiones más vulnerables y pobres de Colombia. ¿Pero cómo es posible ello? Ya enumeramos causas histórico-políticas, antropológicas y hasta geoestratégicas, a pesar de que las comunicaciones Tumaco-San Juan de Pasto son aceptables y poseen la comunicación Buenaventura y la Carretera Panamericana que permiten el intercambio comercial entre la región Pacífico y las otras regiones colombianas y con otros países americanos.

Si bien uno de los cultivos en las zonas rurales sigue siendo el aceite de palma, a pesar de sus aportes económicos, la percepción que se tiene de esta actividad en algunas esferas de nuestro país es que ha causado violaciones de los derechos humanos, torturas, asesinato, desplazamiento, falsificación de documentos, apropiación ilegal de propiedades y territorios colectivos, impacto ambiental, etc. como principal estrategia de dominio, a partir de infundir terror, de grupos armados insurgentes como los paramilitares y las guerrillas y también como estrategia de “presencia del Estado”.

El “agro-negocio” de la palma africana o palma aceitera, ha trascendido nuestras fronteras. Hoy este tema se ubica en el escenario mundial en torno a la discusión energética y la retórica ecológica. Si bien la siembra y procesamiento de la palma estaba orientado a la producción de alimentos y cosméticos, el boom y la extensión del cultivo se explican en razón de una nueva demanda, el estratégico mercado de los combustibles.

(Murillo López & Soto López, 2014 p. 900).

En ese sentido, las materias primas pudieron generar bio-combustibles con la ayuda del Banco Mundial y el FMI, medidas impuestas por el gobierno de Uribe, recordando la alianza que tiene Colombia con USA a través del Tratado de Libre Comercio.

Pero la situación de las explotaciones de *commodities* se ha visto alterada por la presencia del narcotráfico, que ha producido desplazamientos en territorios de los pueblos originarios y los afro-colombianos en medio de una lucha entre el narcotráfico y el Estado (por ejemplo el desplazamiento de los cultivos de coca y amapola del departamento de Putumayo hacia el departamento de Nariño).

Desde el punto de vista de los derechos humanos, las empresas cultivadoras de palma africana llegan a los territorios ancestrales de comunidades nativas, despojando a los habitantes de sus tierras, y por lo tanto de todos los elementos necesarios para su supervivencia. El resultado final es el desplazamiento de las comunidades para dejar vía libre a los cultivos; despojo territorial es bendecido por las autoridades tanto nacionales como locales, que de hecho apoyan a las empresas en esta labor de sacar a los campesinos del territorio. Todo ello mediante prácticas de violencia inimaginables.

(Murillo López & Soto López, 2014, p. 904).

La cuestión política en esta situación crítica es central. Los principales autores consulados, precisamente, creen que los conflictos fueron creciendo a la luz de decisiones de esta índole.

A partir de 1980 hace presencia en la región del Pacífico colombiano una nueva clase empresarial para invertir recursos provenientes en gran parte del tráfico de drogas ilícitas. Muchos de los territorios de indígenas y afro-colombianos que habían permanecido al margen de las dinámicas económicas han venido siendo incluidos de forma acelerada en los contratos de inversión de empresas y de agentes económicos nacionales, la mayoría de ellos vinculados con actividades extractivas, agroindustriales, de producción de narcóticos o de grandes obras de infraestructura que desestabilizaron las economías de los pueblos indígenas y afro-colombianos, que no han generado desarrollo económico en la región, sino que instauraron nuevas formas de pobreza (cultural y ambiental), nuevas amenazas y nuevas vulnerabilidades para estos pueblos.

La ausencia del Estado y su falta de autoridad en muchos lugares de Colombia incidieron en la existencia de espacios “independientes” del control estatal, que facilitaron el acceso a grandes mercados de la cocaína al estar a mitad de camino entre los

países tradicionalmente productores de hoja de coca, Perú y Bolivia, y los fuertes centros de consumo, como los Estados Unidos. En 1995 comienzan a llegar de forma regular actores armados ilegales, interesados coincidentemente con estos empresarios en modificar la estructura productiva de la región. Esta presencia desmanteló las organizaciones sociales, asesinando a su liderazgo y derrumbando la poca y ya debilitada institucionalidad de la región. Las comunidades son utilizadas y movidas de acuerdo con la lógica política, militar o económica de estos actores. Esta situación se ha vuelto insostenible para los habitantes, debido a la degradación del conflicto y a la alta cuota de sangre que vienen colocando los indígenas y los afro-colombianos por persistir en mantenerse al margen de un conflicto que cada vez les es más ajeno.

El gobierno ha dicho que su política de derechos humanos es la misma política de “seguridad democrática”, a pesar de que con este concepto de seguridad se involucre a la población civil en el conflicto armado. Este conflicto armado tiene graves manifestaciones y consecuencias para los indígenas, afro-colombianos y campesinos del Pacífico, como por ejemplo la invasión de sus territorios por todos los grupos armados: guerrilla, paramilitares, cuerpos armados del Estado, narcotraficantes y delincuencia organizada, sumándoles las masacres, desapariciones forzadas y asesinato de líderes. Se hace además evidente la imposición del poder armado que desconoce a las autoridades propias y la autonomía de las comunidades.

La época del terror que se vivió durante las décadas de los 80 y los 90 en Colombia ha quedado grabada en la eterna memoria de millones de ciudadanos víctimas de la violencia. Evidentemente, con la muerte de los principales “barones de la droga” la sociedad colombiana esperaba ansiosamente la paz, y es entonces cuando un nuevo golpe acabó con la esperanza de millones de ciudadanos. Es justamente en ese momento cuando se desprende la reinención de los negocios ilícitos que, lejos de terminarse, se mantienen vigentes y siguen cobrando vidas.

Para finales de los 90 ya habían aumentado tanto las presiones del gobierno de los Estados Unidos para que Colombia interrumpiera la oferta de sustancias ilícitas, que el país se vio obligado a aceptar el Plan Colombia para la erradicación de estos cultivos. Las aspersiones aéreas para destruir las plantaciones de coca, empleando cada vez más fuertes herbicidas químicos,

no lograron los resultados esperados, y los cultivos continuaron desplazándose y creciendo por suelo amazónico a expensas de la frágil selva húmeda del Amazonas. Estos cultivos se trasladaron desde las selvas al litoral Pacífico. No obstante, el Departamento de Estado de los Estados Unidos persiste en la tesis de que el narcotráfico existe porque hay cultivadores de coca.

Estas diversas presencias y operaciones de paramilitares, grupos guerrilleros y fuerzas armadas del Estado confluyen para agravar la situación económica y social de estos pueblos, configurando un estado de desarraigo que pone en peligro su pervivencia como tales. De forma general, el objetivo del desalojo ha sido la explotación a gran escala de los recursos ambientales, especialmente madereros y mineros, para ampliar los latifundios ganaderos o las plantaciones de banano, plátano, palma aceitera y coca.

Después de la presidencia de Uribe, cuyo principal objetivo era la erradicación de los grupos armados guerrilleros, estos se trasladaron hacia zonas del Pacífico colombiano sometiendo a la población local a una mayor pauperización de su situación. En muchos gobiernos, como en el de Andrés Pastrana (1998-2002), se desconocieron estos estándares internacionales, lo que condujo a que los pueblos indígenas de Colombia se retiraran de las mesas nacionales de concertación con el Estado, creadas por decretos 1396 y 1397 de 1996.

Fue más adelante, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cuando se modificó la estructura legal de Colombia con el fin de facilitar el acceso a los recursos de los territorios de propiedad colectiva de indígenas y afrocolombianos. Este ordenamiento se realiza en función de un orden global de desarrollo neoliberal, para el cual los territorios de propiedad colectiva y las economías comunitarias constituyen un estorbo. De esta manera, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez hace desaparecer la pluralidad y la diversidad como fundamentos del régimen democrático que se pensaba construir con la expedición de la Constitución de 1991.

Para la mayoría de los autores especialistas en estos temas, el principal problema radica en la ausencia del Estado como mediador del conflicto entre los paramilitares, militares, la guerrilla, los empresarios dueños de las plantaciones tradicionales y de coca, la población afro y la originaria. Habrá que ver el curso de los acontecimientos luego del tratado de paz que se firmó entre el presidente Santos y el líder de las FARC, teniendo en

cuenta que dicho acuerdo se plebiscitó y por estrecho margen fue rechazado por la población. No obstante, el Senado con modificaciones implementará la ley. Es de esperar que los pueblos originarios y los afrocolombianos recuperen sus territorios y se dediquen a los cultivos tradicionales o a buscar otros alternativos para descomprimir este tipo de conflictos.

Hemos agregado y seguiremos la investigación sobre un Informe ilustrativo de MIRA (ONG) sobre el conflicto entre la provisión de agua y la construcción del oleoducto que une Putumayo con Temuco.



Figura 3. Municipio Tumaco: Comunidades Espriella, Dos Quebradas, Saltos de Clever, La Cortadura y La Brava (Nariño)

UN EJEMPLO DE LA CONFLICTIVIDAD HIDRO-SOCIAL

El 10 de mayo de 1962, la *Texas Petroleum Company* hace entrega del oleoducto trasandino (OTA) que atraviesa 305 km desde Putumayo hasta Tumaco. En 2008 el sector recibió importantes regalías que no se tradujeron en mejora alguna para los pueblos citados anteriormente.

Desde 2009, las comunidades que se abastecen de los ríos Caunapí, Rosario y Mira, en zona rural de Tumaco, han reportado afectaciones debido a la contaminación de ríos causada por atentados a la infraestructura petrolera y la instalación de

válvulas ilegales en el Oleoducto Trasandino. Estos ríos son la principal fuente de abastecimiento de agua de más de 10.000 habitantes de la zona.

El territorio ribereño del río Caunapí, dentro de la jurisdicción del Consejo Comunitario Mayor del río Caunapí, del cual hacen parte estas cinco comunidades, ha sido con frecuencia afectado por el conflicto armado. Es un corredor donde ejercen presión diversos actores armados, hay presencia del Ejército y la Policía y se ha reportado actividad de la columna Daniel Aldana de las FARC-EP y de Los Rastrojos. En este contexto son frecuentes los enfrentamientos armados y atentados en la zona, que causan restricciones a la movilidad de las comunidades, así como desplazamientos internos que no estarían siendo denunciados por el temor de familias a hacer declaraciones.

Desde abril de 2014, 2015, las veredas ribereñas del río Caunapí han sufrido la contaminación del río, su principal fuente de agua, debido a derrames de crudo por la presencia de refinerías ilegales en varios puntos. Esta situación empieza a tener implicaciones en la salud de la población y afecta en mayor grado a niños y niñas, pues acostumbran bañarse en el río y consumir agua sin mayor tratamiento por la presencia de refinerías ilegales en varios puntos.

Se pueden mencionar las siguientes situaciones:

- Se evidencia una débil respuesta institucional en atención a las emergencias por derrame de petróleo.
- No hay claridad frente a las responsabilidades que se deben asumir. No se cuenta con planes de contingencia que permitan dar respuesta oportuna y bajo estándares mínimos a las necesidades de la población.
- Las familias no cuentan con acceso estable a recursos económicos, debido a la pérdida de los suelos agrícolas, causada en parte por la contaminación por hidrocarburos y a las aspersiones aéreas que se realizaron en la zona.
- Además, hay alto riesgo de pérdida de ganado por la contaminación de fuentes hídricas y pastizales, por los derrames de crudo.
- El Consejo Comunitario Río Caunapí y demás consejos de la costa Pacífica han estado buscando apoyo constantemente a través de acercamientos con la institucionalidad, lo que dio como resultado la firma del proyecto productivo y socioempresarial, en el marco del Pacto Nacional Agrario.

ALCANCE DE LA CRISIS Y PERFIL HUMANITARIO

Cerca de 2786 personas (700 familias) están afectadas por esta problemática. Son comunidades que continuamente han sido afectadas por el conflicto armado. La situación es más compleja por las dificultades de acceso a la zona, pues este debe hacerse por el río que se encuentra controlado por grupos armados no estatales, y se presentan constantes limitaciones a la movilidad. Adicionalmente, la población ha sido víctima de desplazamientos interveredales que no son visibilizados porque las familias de la zona temen declarar.

Teniendo en cuenta la tendencia de 2013 y lo corrido de 2014, se prevé que se sigan presentando este tipo de afectaciones. Eso implica que las fuentes hídricas tardarán en recuperar condiciones aptas para el uso de la población. El número total de población afectada en su totalidad puede ser mayor, ya que debido a las limitantes de seguridad para el ingreso oportuno para colocar las barreras e iniciar la limpieza del río a causa de las fuertes lluvias, el petróleo siguió la corriente por el río afectando a otras comunidades. Las comunidades dispersas, mujeres, y los niños y niñas entre 0 a 5 años son los grupos poblacionales más vulnerables.

INTERVENCIONES CLAVE

Ante la contaminación de fuentes de agua, se recomienda:

- Construir sistemas individuales de captación de agua de lluvias, garantizando capacidad de almacenamiento.
- Es necesaria la distribución de tanques de 250 litros a las familias que no reciben los sistemas familiares, pues, aunque tienen fuentes alternativas de abastecimiento, requieren mayor capacidad de almacenamiento.
- Por el problema general de calidad de agua, la distribución de filtros de bujía cerámica a la totalidad de las familias es una necesidad urgente.
- Capacitación en gestión del agua y prácticas de higiene.
- Conformación de comités de agua y saneamiento en cada una de las comunidades.

CONCLUSIONES PARCIALES

La presente ponencia tiene conclusiones parciales que implican un giro descolonial y a su vez lo complementamos con una posible articulación con los estudios culturales a partir de la etnicidad y de la otredad territorial y social. Pero esas relaciones no se encuentran exentas de fuertes grados de conflictividad general y/o particular. Presentamos grandes secuencias discursivas, para posteriormente situarnos en el Pacífico colombiano, que reviste conflictividades étnicas, políticas, demográficas, sociales-institucionales, económicas y culturales. Finalmente, rescatamos un estudio de caso en que el problema del agua y la contaminación petrolífera es fundamental para rescatar los fenómenos de pobreza y marginalidad de sus habitantes, que reflejan las conflictividades que enumeramos en el párrafo anterior. Creemos que desde estas perspectivas realizamos un aporte a una geografía latinoamericana que recién en los últimos años posee un potencial de criticidad que desarrollar, pero en diálogo y contextualizados y descentrados epistemológicamente, teniendo como norte la descolonización de aquello que la geografía del *statu quo* *obliteró* por negligencia o intencionalmente. El estudio de caso que combina una problemática ligada a la contaminación de las aguas por un oleoducto se traduce en una problemática que alcanza a los sectores afro-descendientes, más empobrecidos y afectados por el oleoducto, que supone enormes ganancias para la empresa encargada de aquel, que se traduce en una condena a dichos sectores subalternizados a no poseer servicios de agua potable carentes de contaminación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Agier, M.; Hoffmann, O. & Restrepo, E. (1999). *Tumaco, haciendo ciudad*. Ican. Universidad del Valle.
- Borsani, M. E. & Quintero, P. (2014). *Los desafíos decoloniales en nuestros días. Pensar en colectivo*. Editorial de la Universidad Nacional del Comahue.
- Carballo, F. & Mignolo, W. (2014). *Una concepción descolonial del mundo*. Ediciones del Signo.
- Mignolo, W. (2007). *La idea de América Latina*. Gedisa Editorial.

Murillo Lopez, J. & Soto Lopez, K. (2014). Geografía del terror y desplazamiento forzado en el Pacífico Colombiano. En *Actas del VIII Congreso Internacional de Geografía de América Latina*. (pp. 898-908).

Restrepo, E. (2012). *Antropología y Estudios Culturales. Disputas y confluencias desde la periferia*. Editorial Siglo XXI.

Silva, M.; Fedele, M.; Mamonde, N. & Car, N. (2017). Discursos, estructuraciones teóricas y empíricas “otras” en la periferia latinoamericana. La cuestión decolonial en debate. En *Actas de las XIX Jornadas de Investigación de Geografía del IdIHCS*. UNLP (en prensa).

Szurmuk, M. & Mckee Irwin, R. (2009). *Diccionario de Estudios Culturales Latinoamericanos*. Editorial Siglo XXI.

PÁGINAS DE INTERNET

Oban, Pablo Emilio (2021). Bogotá. Colombia. Página 10.

Equipo humanitario Colombia (2011-2014). Informe final Mira. San Ignacio. Pasto. Colombia.

FUENTES DE ORGANISMOS OFICIALES NACIONALES E INTERNACIONALES

INCORA, Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.

DNP, Departamento Nacional de Planificación.

PNUD, Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Instituto Agustín Codazzi. Bogotá. Colombia.